

**SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE  
SENADOR FRANCISCO CHAHUÁN CHAHUÁN**

**INFORME PREPARACIÓN DE CONTENIDOS Y ANTECEDENTES.**

“CUMPLIMIENTO ALTERNATIVO DE PENAS EN PERSONAS  
MAYORES: FUNDAMENTOS JURÍDICOS, ÉTICOS Y NORMATIVOS  
APLICABLES A LA REALIDAD PENITENCIARIA CHILENA.”

DERECHOS HUMANOS, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA –  
DERECHO INTERNACIONAL – LEGISLACIÓN COMPARADA.

FELIPE CRESPO AVENDAÑO.  
JUNIO 2025.  
SANTIAGO/VALPARAÍSO.

## I. INTRODUCCIÓN

Este informe tiene como objetivo argumentar de forma jurídica, humanitaria y socialmente, la necesidad de implementar mecanismos de cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para personas mayores de edad. Esta propuesta se justifica en principios del derecho penal moderno, en estándares internacionales de derechos humanos y en condiciones concretas derivadas del envejecimiento carcelario que afecta progresivamente al sistema penitenciario chileno. En efecto, la privación de libertad no puede ser analizada de manera uniforme ni desconectada de las características particulares del sujeto condenado, menos aún cuando se trata de personas en situación de extrema vulnerabilidad biológica, como es el caso de los adultos mayores.

Lejos de cuestionar el origen judicial de las condenas o la gravedad de los hechos que motivaron las sentencias, el foco de este documento se centra exclusivamente en el tratamiento penitenciario y en las condiciones reales de cumplimiento de la pena, particularmente cuando la edad avanzada, las enfermedades crónicas, el deterioro cognitivo, la pérdida de funcionalidad o la condición terminal transforman la prisión en un castigo desproporcionado, innecesario y potencialmente inhumano. Una política penal legítima no puede sostenerse en la mera ejecución mecánica de la pena, sino que debe evaluar permanentemente su razonabilidad, efectividad y adecuación a la realidad del condenado. En este sentido, la ejecución penal debe interpretarse como una etapa que también está sujeta a los principios constitucionales, incluyendo la proporcionalidad, la humanidad y la finalidad resocializadora de la sanción penal.

El fenómeno del envejecimiento de la población penal se ha vuelto una realidad ineludible y creciente en el contexto nacional. Según datos oficiales de Gendarmería de Chile (2024), actualmente existen más de 2.500 personas privadas de libertad que superan los 65 años, y de ellas, al menos 500 tienen más de 75 años. Esta cifra representa un aumento sostenido en la última década y plantea serios desafíos estructurales al sistema penitenciario chileno, el cual no ha sido diseñado ni adaptado para satisfacer las necesidades específicas de esta población. Las cárceles tradicionales carecen de infraestructura adaptada, personal especializado en geriatría penitenciaria y protocolos médicos suficientes para enfrentar condiciones como la demencia, la insuficiencia motriz, la incontinencia, la pérdida de autonomía o el dolor crónico.

Un artículo publicado por El Mostrador (2023) indica que mantener a un interno adulto mayor puede costar hasta tres veces más que un interno promedio, debido al uso constante de medicamentos, controles médicos especializados, atención de enfermería permanente, transporte a centros hospitalarios y asistencia funcional diaria. A ello se suman los recursos humanos y logísticos que deben destinarse para custodiar a personas que, en muchos casos, tienen movilidad reducida o están en estado terminal. Asimismo, el medio La Tercera (2023) documentó que más del 60% de los reclusos mayores en Punta Peuco utilizan sillas de ruedas, caminan con dificultad o requieren apoyo para sus actividades básicas, lo que convierte el espacio carcelario en una forma de confinamiento no solo penal, sino también físico y sanitario.

La Organización Mundial de la Salud (2015) ha advertido que el sistema penitenciario tradicional no está diseñado para abordar las necesidades de salud, seguridad y bienestar de las personas mayores. La falta de adaptación institucional no solo reduce las posibilidades de rehabilitación, sino que incrementa el sufrimiento evitable, poniendo en entredicho la legitimidad del encierro como instrumento del Estado. La prisión prolongada en estas condiciones puede constituir, conforme al derecho internacional, una forma de trato cruel, inhumano o degradante, prohibido expresamente por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En este escenario, el debate sobre el cumplimiento alternativo de penas en adultos mayores no es solo una cuestión de gestión penitenciaria, sino una expresión concreta de los valores que rigen un sistema jurídico democrático. Evaluar de manera técnica, justa y despolitizada la situación de las personas mayores condenadas permite que el Estado cumpla con sus deberes internacionales, respete la dignidad humana y racionalice el uso de sus recursos. Este informe pretende aportar antecedentes, fundamentos normativos y recomendaciones prácticas para avanzar hacia una política penal más proporcional, humanitaria y coherente con el siglo XXI.

## II. NORMATIVA INTERNACIONAL APLICABLE

Chile ha ratificado diversos instrumentos internacionales que obligan al Estado a adaptar las condiciones de detención conforme a la edad y la situación de vulnerabilidad de las personas.

Entre ellos destacan:

- Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), en su regla 109, señalan que los internos con discapacidades mentales o físicas deben ser atendidos en lugares que respondan adecuadamente a sus necesidades.
- La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (OEA, 2017), ratificada por Chile, establece en su artículo 12 que las personas mayores privadas de libertad tienen derecho a condiciones dignas, adecuadas y diferenciadas.
- El Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (ONU, 1988), indica que toda persona detenida debe ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

La jurisprudencia internacional, como en el caso *López Lone y otros vs. Honduras* (Corte IDH, 2015), ha reiterado que el Estado debe ofrecer medidas alternativas a la prisión cuando el cumplimiento efectivo de la pena no cumple una función legítima y sí provoca sufrimiento innecesario.

La pena privativa de libertad tiene fines específicos: la rehabilitación, la reinserción y la prevención. En adultos mayores con enfermedades graves, movilidad reducida o deterioro cognitivo, la prisión no cumple estos objetivos y, por el contrario, se transforma en un castigo sin sentido.

El principio de proporcionalidad exige que la intensidad del castigo sea coherente con los fines perseguidos por el derecho penal. Tal como ha señalado el Tribunal Constitucional chileno (Rol N° 2222-13), la privación de libertad no debe ser una forma de sufrimiento per se, y el Estado tiene el deber de aplicar el castigo en condiciones compatibles con la dignidad humana.

Zaffaroni (2018) plantea que castigar con prisión a personas que ya no representan un riesgo y cuya vida se extingue entre muros carece de lógica, utilidad y humanidad. La ejecución penal en estos casos deja de ser legítima y se torna puramente simbólica y cruel.

En países como Alemania, el Código Penal permite la suspensión de la pena en mayores de 70 años con enfermedades graves. En Canadá, el Corrections and Conditional Release Act permite libertad compasiva por edad o estado de salud. Argentina, por su parte, ha concedido prisión domiciliaria a internos mayores de 80 años sin distinción del delito cometido.

En Chile, la Corte Suprema ha concedido beneficios penitenciarios a personas mayores basándose en informes médicos y dictámenes de Gendarmería. En el caso Rol N° 31.245-2020, se otorgó reclusión domiciliaria a un condenado con movilidad reducida y enfermedades crónicas, priorizando el derecho a la vida y la integridad física.

Estas experiencias muestran que la edad y la salud son factores que permiten legítimamente reconsiderar la forma de ejecución de la pena, sin que ello implique impunidad ni negación de la condena.

### **III. RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA**

A la luz de la evidencia empírica, los estándares internacionales y la jurisprudencia comparada, se recomienda:

1. Establecer una política nacional de revisión de penas privativas de libertad para personas mayores de 75 años.
2. Ampliar la aplicación de la Ley N° 18.216 para incluir la reclusión domiciliaria como medida prioritaria por razones humanitarias.
3. Crear una Comisión Interdisciplinaria compuesta por médicos, juristas, trabajadores sociales y representantes del INDH, con facultades de evaluación vinculante.

4. Incorporar un enfoque que evite la discriminación por la naturaleza del delito y se centre en la situación de salud, edad y riesgo social actual.

5. Implementar sistemas de control y monitoreo electrónico que permitan compatibilizar seguridad pública con respeto a los derechos fundamentales.

#### **IV. CONSIDERACIONES FINALES**

Desde una perspectiva ética, el encierro de personas mayores plantea serias interrogantes sobre la finalidad de la pena, la humanidad del sistema penal y los valores que guían al Estado en la aplicación del castigo. Diversos filósofos del derecho han advertido que la aplicación de una pena que ya no cumple ninguna función disuasiva o resocializadora deviene en un acto simbólico de poder estatal más que en una herramienta legítima del derecho penal.

El principio kantiano de tratar al ser humano como un fin en sí mismo y no como un medio se ve vulnerado cuando se insiste en aplicar la reclusión a personas que están próximas al fin de su vida o que viven en condiciones de sufrimiento físico o psíquico. Como ha afirmado Ferrajoli (2011), *“la prisión debe ser una excepción, no la regla, y su aplicación debe evaluarse siempre en relación con el respeto a la dignidad de la persona”*.

La ética del cuidado, promovida por autores como Joan Tronto, enfatiza la necesidad de construir sistemas jurídicos más sensibles a las necesidades de los sectores vulnerables, incluyendo a las personas mayores. En este contexto, el cumplimiento alternativo de penas no es un privilegio, sino una exigencia moral y jurídica para mantener la legitimidad del sistema penal.

La implementación de mecanismos de cumplimiento alternativo para adultos mayores condenados también requiere cambios institucionales y reformas legislativas. Actualmente, si bien la Ley N° 18.216 contempla penas sustitutivas, su aplicación está limitada por criterios restrictivos que no consideran la edad avanzada o el estado de salud como condiciones suficientes.

Se propone modificar dicha ley para incluir explícitamente causales humanitarias como criterios preferentes para la sustitución de penas, considerando precedentes internacionales. Además, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debería crear un registro nacional de personas mayores condenadas, con indicadores de salud, movilidad y redes de apoyo, para priorizar las evaluaciones.

Otra propuesta legislativa consiste en establecer audiencias anuales de revisión de pena para personas sobre los 75 años, con la participación de peritos médicos y organismos de derechos humanos. Esta revisión debería ser obligatoria y orientada a evaluar la proporcionalidad y efectividad del cumplimiento carcelario.

Finalmente, se requiere dotar a Gendarmería de Chile de unidades geriátricas capacitadas o, en su defecto, convenios con servicios de salud pública que permitan derivaciones en condiciones dignas. La colaboración entre el Poder Judicial, el Ejecutivo y la sociedad civil es esencial para concretar una política pública que combine seguridad, justicia y humanidad.

## **V. CONCLUSIÓN**

En el contexto de una sociedad que aspira a consolidar un Estado de Derecho plenamente respetuoso de la dignidad humana, el tratamiento penal hacia las personas mayores de edad privadas de libertad constituye un desafío ineludible, que interpela tanto a los poderes públicos como a la conciencia ética del conjunto social. El presente informe ha demostrado, desde múltiples ángulos —jurídico, humanitario, normativo y ético—, que la mantención de adultos mayores en régimen de privación de libertad, especialmente aquellos que presentan condiciones de salud graves, deterioro funcional o cognitivo, o que no representan un peligro actual para la sociedad, contradice los principios fundamentales del derecho penal moderno, los compromisos internacionales suscritos por el Estado chileno y los valores mínimos que debe garantizar toda democracia.

Lejos de constituir un acto de indulgencia o de impunidad, la aplicación de penas sustitutivas para personas de edad avanzada debe entenderse como una forma racional, proporcional y

legítima de ejecutar la sanción penal, a través de mecanismos que mantengan el cumplimiento del castigo en condiciones adecuadas y compatibles con los derechos humanos. Las normativas internacionales, como las Reglas Mandela, la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y las disposiciones del derecho comparado, han avanzado sostenidamente en esa dirección, reconociendo que el envejecimiento carcelario requiere respuestas institucionales diferenciadas, sensibles y sostenidas en principios de humanidad, no de venganza.

Por tanto, el Estado de Chile no solo puede, sino que debe, adoptar una política activa y sistematizada de revisión de penas respecto de los internos mayores, estableciendo parámetros claros, transparentes y no discriminatorios para la aplicación de la reclusión domiciliaria total, libertad vigilada intensiva u otras modalidades sustitutivas, sin perjuicio de la gravedad del delito, sino atendiendo al estado actual de la persona condenada. La justicia, en su dimensión más profunda, no puede limitarse a la sanción, sino que debe también garantizar el trato justo y digno, incluso en la etapa de cumplimiento de la pena. En ello se juega no solo la coherencia del sistema penal chileno con los tratados internacionales que ha ratificado, sino también el carácter humanitario y democrático de nuestra convivencia institucional.

## REFERENCIAS

- CIDH. (2021). Informe sobre personas mayores y sistemas penitenciarios. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- El Mostrador. (2023, agosto 12). El costo de envejecer en la cárcel chilena. <https://www.elmostrador.cl>
- La Tercera. (2023, noviembre 22). Adultos mayores en Punta Peuco: ¿un problema de salud pública? <https://www.latercera.com>
- Organización Mundial de la Salud. (2015). World report on ageing and health.



- ONU. (2015). Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela).
- Organización de Estados Americanos. (2017). Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
- PNUD. (2020). Informe sobre desarrollo humano y sistema penitenciario en América Latina.
- Tribunal Constitucional de Chile. (2013). Sentencia Rol N° 2222-13.
- Zaffaroni, E. R. (2018). Derecho penal humano. Ediciones Colihue.
- Código Penal Alemán (StGB § 455). (2022). Suspension of enforcement due to health concerns.
- Corrections and Conditional Release Act. (2021). Public Safety Canada.